



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 24 ORDINARIA

LUNES 27 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del lunes veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

Los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistieron a la sesión, el primero previo aviso a la Presidencia y el segundo por desempeñar una comisión oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintitrés ordinaria, celebrada el jueves veintitrés de marzo del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



Sesión Pública Núm. 24

Lunes 27 de marzo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes veintisiete de marzo de dos mil diecisiete:

**I. 25/2016
y acs.
27/2016 y
28/2016**

Acción de inconstitucionalidad 25/2015 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, promovidas por diversos diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de dicho Estado, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016, promovidas, respectivamente, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracciones II, III, V y XII, 12, fracción II, inciso b), 14, 15, 16, 33, fracción II, 39 y 40 —con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto de este fallo— de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada por Decreto número 75 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. CUARTO. Se*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

declara la invalidez de los artículos 12, fracción III, incisos a) y b), 24, 25, 26, 33, fracción I, en la porción normativa ‘candados de pulgares’ y 40, en la porción normativa ‘sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables’, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. QUINTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Libre y Soberano de México. SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México’, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno al considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 4, denominado “Invasión a la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos”.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán recordó que, en la sesión pasada, presentó la propuesta y recordó los argumentos.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció en favor del proyecto, pero en contra de las consideraciones, respecto de lo cual, en su caso, hará valer voto concurrente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Indicó que, si bien es correcta la afirmación de que a partir de la reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince al artículo 73, fracción XXI, constitucional, los Estados cedieron su facultad de legislar en la materia de tortura para que fuera el Congreso de Unión el que estableciera los tipos y las penas, y a los Estados les restara solamente una concurrencia operativa que debe quedar establecida en la ley general, pareciera ser contrario a otras afirmaciones del proyecto, por ejemplo, “el Congreso General implementará las normas que estime pertinentes sobre tales materias, y prevé un modelo a través del cual los órdenes de gobierno, federal, local y Municipal, deberán armonizarse para cumplir con los fines constitucionales” y “dicha facultad del legislador local quedó vedada hasta la emisión de las normas generales”, siendo que, en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 21/2013, se delimitó que las categorías que se enumeran en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional —secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, trata de personas, torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes— son penales, por lo que se federaliza la facultad legislativa en la materia y dejó a los estados únicamente una facultad operativa, lo cual no deja espacio competencial para que los Estados armonicen o ajusten su propia legislación en la materia.

Aclaró que esta mecánica es diferente a la determinada en las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

referente a las materias de anticorrupción y responsabilidades administrativas de servidores públicos, esto es, una mecánica transicional específica del artículo 73, fracciones XXIV y XXIX-V, constitucional, lo cual no es aplicable en las materias de la diversa fracción XXI, inciso a). Estimó que sería conveniente citar estos precedentes y consideraciones.

La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente porque, al igual que el señor Ministro Cossío Díaz, consideró que el tema actual no guarda relación con la mecánica transicional, ya que la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional entró en vigor el dieciséis de junio de dos mil quince, siendo que la ley impugnada se publicó el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, por lo que, para la fecha en que se emitió ésta, no tenía competencia el congreso local, al margen de lo previsto en el artículo transitorio tercero que se invoca en la página ciento dieciséis del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció que formulará voto concurrente, dado que hay incompetencia tanto por materia como por temporalidad. Adelantó que, en ese sentido, proyectó la acción de inconstitucionalidad 109/2015 —de próxima resolución—, donde propone la invalidez del código penal chiapaneco, en cuanto al tema de tortura. Apuntó que estará a la espera de que el señor Ministro ponente Pérez Dayán ajuste su propuesta.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Medina Mora I. recordó estar por la invalidez de toda la ley por razón de incompetencia total del congreso local para regular el uso de la fuerza pública. Expresó duda sobre si la reserva del artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional que se refiere a tipos penales y sus sanciones también impide legislar sobre cuestiones diversas.

El señor Ministro Laynez Potisek estimó pertinente la duda del señor Ministro Medina Mora I. porque el segundo párrafo de dicho inciso a) indica que “Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios”, lo cual permite que, fuera de los tipos penales y sus sanciones, exista una distribución para que legislen los congresos locales.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con la declaración de inconstitucionalidad, en espera de ver qué aceptará o no el señor Ministro ponente Pérez Dayán. De cualquier modo, anunció voto concurrente, apartándose del preámbulo a partir de la foja ciento cuarenta y nueve, como es su costumbre.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó a favor del proyecto, con las razones adicionales apuntadas por los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea, pues no sólo se trata de la falta de competencia, sino del momento en el que se emitió la norma cuestionada, por lo que debe declararse su invalidez. Señaló



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

estar al alba del pronunciamiento del señor Ministro ponente Pérez Dayán para, en su momento, formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto para revisar detenidamente el argumento y los precedentes invocados por el señor Ministro Cossío Díaz y, en su caso, añadirlos para su revisión.

Apuntó que, como esgrimió el señor Ministro Medina Mora I., en la propuesta se analizó que la razón para que se entregara la competencia de regulación de la materia al Congreso de la Unión para determinar los tipos penales y sus sanciones era que, mediante una ley general, se precisaran sus alcances, por lo que si bien el artículo 12, fracción III, incisos a) y b), impugnados aporta definiciones positivas y de buena intención, el tipo penal generado podría colisionar sustantivamente con lo que se pretende castigar a través de la ley general, lo cual provocaría inseguridad jurídica y, consecuentemente, se propuso su invalidez, más allá del tema estrictamente competencial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 4, denominado “Invasión a la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos”, consistente en declarar la invalidez del artículo 12, fracción III, incisos a) y b), de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la cual se aprobó por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Unanimitad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos y Laynez Potisek reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 5, denominado “Violación a los principios constitucionales de tratamiento digno adolescentes y a personas mayores de edad en centros preventivos e instituciones de reintegración y reinserción social”. El proyecto propone declarar la invalidez de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en razón de que, mediante decreto publicado el dos de julio de dos mil quince, se reformaron los artículos 18, párrafos cuarto y sexto, y 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, con lo cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de ejecución de penas y justicia penal para adolescentes que habrá de regir tanto en la materia federal como en el fuero común, y se emitieron, en consecuencia, la Ley Nacional de Ejecución Penal —que regula las condiciones en que pudiera actualizarse el uso de la fuerza, en los centros preventivos de reinserción o de readaptación social— y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Penal para Adolescentes, con lo cual cesó la vigencia de las normas estatales. Por ende, los numerales en estudio fueron emitidos por el legislador estatal en un momento en el que carecía de facultades para legislar en dichas materias.

El señor Ministro Cossío Díaz reiteró la propuesta hecha en el punto anterior. Adelantó que, en la discusión de efectos, indicará que los artículos 17 y 27 de la ley combatida tienen el mismo vicio de inconstitucionalidad y, por ende, debería declararse su invalidez por extensión.

La señora Ministra Piña Hernández observó que el proyecto aduce que las normas violan el artículo transitorio segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil quince. Se apartó de esta consideración porque, a partir de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), que entró en vigor el tres de julio de dos mil quince, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión emitir la legislación en materia de justicia penal para adolescentes y ejecución de penas, por lo que el congreso local ya no tenía facultades para emitir la ley en combate, al margen de cualquier régimen transicional precisado en la propia Constitución.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena compartió el sentido del proyecto y se unió al comentario del señor Ministro Cossío Díaz, en cuanto a declarar la inconstitucionalidad del artículo 27, en vía de consecuencia, en el apartado de efectos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó que únicamente podrían invalidarse las porciones normativas “e instituciones de reintegración social de adolescentes” de las normas en cuestión, puesto que, de invalidarlas totalmente, se dejaría fuera del sistema a los centros preventivos y de reinserción social.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió en que sería viable invalidar únicamente esa porción normativa. Tras leer el texto de los artículos en estudio, apuntó que la razón principal del proyecto para invalidarlos es competencial, dada la reforma al artículo 73 constitucional y la emisión de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; sin embargo, la ley impugnada no tiene por propósito regular la reintegración social de los adolescentes, sino únicamente el uso de la fuerza pública dentro de esos centros, no exclusivamente para adolescentes, además de que el artículo 46, fracción XV, de la citada ley nacional prevé que “Artículo 46. Derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad [...] XV. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine esta Ley y de acuerdo a las disposiciones establecidas respecto al uso legítimo de la fuerza”, su diverso 72, fracción IV, inciso d), contempla que “Artículo 72. Áreas especializadas de la Autoridad Administrativa [...] IV. Los Centros de Internamiento contarán con las siguientes atribuciones: [...] d) Hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de las personas sujetas a esta Ley, la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

disciplina en la Unidad de Internamiento y evitar daños materiales. [...] Al hacer uso legítimo de la fuerza, las autoridades deberán tomar en cuenta el interés superior de la niñez y utilizarán el medio idóneo, proporcional y menos lesivo para éste y sólo por el tiempo estrictamente necesario para mantener o restablecer el orden o la seguridad”, y el diverso 74, fracción III, alude a que “Artículo 74. Obligaciones generales para las instituciones de Seguridad Pública [...] III. Hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna”.

Por ello, concluyó que la citada ley nacional remite a una ley que establezca el uso de la fuerza y, dado que las normas impugnadas no regula los centros de readaptación de los adolescentes, sino sólo el uso de la fuerza pública en éstos, expresó dudas sobre si deberían declararse inconstitucionales.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán indicó que, precisamente por la duda de la señora Ministra Luna Ramos, se remitió una adición al proyecto en la que se incluyó el tema de la reclusión de quienes son adolescentes y quienes no lo sean, a propósito de la reforma al artículo 73, XXI, inciso c), constitucional, el cual apunta a que el Congreso de la Unión tendrá competencia para expedir “La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común”, siendo que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicaron la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, aun cuando el argumento va dirigido exclusivamente a la justicia penal para adolescentes, ambas leyes nacionales prevén todos los supuestos y, en ese tenor, se propone la invalidez de las normas impugnadas por incompetencia para todos los supuestos.

Por lo anterior, sostuvo el proyecto, anunciando que estaría sujeto a lo que el Tribunal Pleno determine.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó conforme con la explicación del señor Ministro ponente Pérez Dayán y se anunció por la invalidez total de los preceptos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 5, denominado “Violación a los principios constitucionales de tratamiento digno adolescentes y a personas mayores de edad en centros preventivos e instituciones de reintegración y reinserción social”, consistente en declarar la invalidez de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar



Morales. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Cossío Díaz reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 6, denominado “Ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza”. El proyecto propone declarar infundada la omisión legislativa en cuanto a la ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza, atribuida a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en razón de que, si bien la ley impugnada no contempla esas sanciones específicas, prevé la manera en que debe procederse en estos casos, esto es, mediante el siguiente procedimiento: 1) deberá de llevarse a cabo una investigación de tales hechos por parte de la institución de seguridad respectiva y 2) los resultados de tal investigación deberán de remitirse a los órganos de control respectivos para que determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales y aquellas sanciones previstas en la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que, en su caso, deban imponerse a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que no observen sus disposiciones.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Apuntó que, en el caso, no es factible examinar si el procedimiento de responsabilidades y sanciones que regulan las diversas leyes —a las que se ha hecho referencia— se encuentra o no apegado al parámetro de regularidad constitucional, pues tales cuestiones no pueden formar parte de la materia de estudio del presente medio de control.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró estar en contra de la procedencia de las omisiones legislativas, como ha sido su costumbre pero, vencida por la mayoría, se pronunció en favor del proyecto, apartándose de consideraciones.

La señora Ministra Piña Hernández apuntó que la accionante hizo valer el argumento de que no se previó sanción alguna para el mal uso de la fuerza pública, en contravención de los conocidos como “Principios de La Habana”; sin embargo, no son obligatorios para el Estado Mexicano, por lo que no podría analizarse un control de constitucionalidad a partir de esos principios. Indicó que, de acuerdo al artículo 1º constitucional, se debe establecer un régimen de responsabilidades, mas no necesariamente en la misma ley, por lo que estará por la validez de la norma, pero apartándose de las consideraciones del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en contra del proyecto y por la invalidez de la norma, al no haberse establecido sanciones en el capítulo correspondiente, siendo que únicamente remite de forma abstracta a las responsabilidades administrativas o penales,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

estimando que debe aludir a los tipos concretos, por ejemplo, el delito de uso abusivo de armas de fuego por parte de elementos de seguridad pública ni la responsabilidad de los mandos superiores, como lo exigen, respectivamente, los puntos 7 y 24 de los PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.

Aclaró que, si bien este instrumento internacional no forma parte del bloque de constitucionalidad o del parámetro de regularidad constitucional y, por ende, no tiene jerarquía constitucional, lo cierto es que se trata de una interpretación autorizada de las obligaciones que ha asumido el Estado Mexicano para respetar y proteger los derechos humanos, particularmente el de la vida y el de la integridad personal.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán estimó que en el proyecto probablemente se requeriría pormenorizar que el artículo 53 resulta válido, pues indica que “A los mandos y elementos cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta Ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan. Cuando así proceda, los resultados de dicha indagación se comunicarán a los órganos de control que correspondan y en su caso, se dará vista al Ministerio Público para que sean acreedores, de acuerdo con su participación a la aplicación de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

responsabilidad administrativa, civil o penal y aquellas sanciones que señalen la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios”, en tanto que las leyes de responsabilidades administrativas establecen los procedimientos y sanciones que correspondan a cada una de las inobservancias para, con ello, producir la sanción correspondiente, por lo que no es necesario que se definan los tipos penales en todos los ordenamientos que están obligados a acatar los servidores públicos. Con esta acotación, sostuvo su proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que no aludió a definir los delitos, sino a remitir a las conductas y tipos específicos, máxime que, al tratarse de la ley que regula el uso de la fuerza pública, es trascendente constitucionalmente que se haga esta remisión. Por ello, se mantuvo en la idea de que la norma es inconstitucional.

La señora Ministra Piña Hernández difirió del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en que exista la obligación constitucional de que la sanción esté establecida en la ley en cuestión y no en una ley diversa, además de que en su artículo 9, fracciones II, XIII, XVIII, XIX y XXI, se contempla que “Son obligaciones generales de las instituciones de seguridad pública, en el uso de la fuerza por sus elementos, las siguientes: [...] II. Adoptar las medidas necesarias a través de un régimen de responsabilidades, para que los mandos, cuando tengan conocimiento que los elementos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

bajo sus órdenes recurran o hayan recurrido al uso de la fuerza ilícita o a la utilización de armas de fuego asuman su obligación de iniciar el procedimiento correspondiente y en su caso dictar las sanciones procedentes [...] XIII. Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan erradicar las prácticas ilegítimas, a fin de mejorar la eficacia de la actuación de sus elementos, a la vez que se sometan sus acciones a procedimientos disciplinarios o penales, si ello procede [...] XVIII. Iniciar la investigación ante la autoridad correspondiente en caso que los elementos hagan uso ilícito de la fuerza en contra de las personas o terceros. XIX. Investigar técnica y científicamente los incidentes en que se haga uso de la fuerza, considerando el cómo sus consecuencias pueden afectar a la institución, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes [...] XXI. Propiciar el desarrollo de investigaciones en los casos en los que sus elementos hayan hecho uso ilícito de la fuerza y armas de fuego, así como atender y colaborar oportunamente con las autoridades competentes en la entrega de información y demás acciones necesarias para concluir con tales investigaciones”.

Agregó que el diverso artículo 48 prevé que “El Gobierno del Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la presente Ley serán responsables de la reparación integral a las víctimas que resulten por el uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego, así como por no adoptar las medidas correspondientes para impedir, eliminar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

o denunciar ese uso por los elementos a su cargo”, que el 52 establece la obligación, al mando o elemento que tengan conocimiento de un exceso o uso ilegítimo de la fuerza, de denunciarlo y, finalmente, el 53 señala la vista respectiva al ministerio público.

En tal sentido, reiteró su voto por la invalidez de los preceptos, apartándose de las consideraciones del proyecto, y anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió con el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en que, tratándose de una ley específica del uso de la fuerza y al ser un asunto delicado, la propia ley debería contener, por lo menos, las sanciones en relación con la propia actividad de que se trata.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 6, denominado “Ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza”, consistente en declarar infundada la omisión legislativa en cuanto a la ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza, atribuida a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos vencida por la mayoría al votar en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas, Piña Hernández, Medina Mora I. por razones distintas, Laynez



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Potisek y Pérez Dayán. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente Aguilar Morales votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 7, denominado “Ausencia de salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de seguridad pública”. El proyecto propone declarar infundada la omisión legislativa en cuanto a las salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de las instituciones de seguridad pública, atribuida a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en razón de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a la autoridad administrativa a proveer todo lo necesario para la capacitación de los miembros de seguridad pública, además de que la información, capacitación, comprensión y existencia de disposiciones secundarias a esta ley la hará puntualmente aplicable para sus destinatarios.

En este mismo marco, indicó que se considera que el artículo transitorio cuarto de la ley en cuestión es correcto, al estipular que las instituciones de seguridad pública en la entidad federativa deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública, dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir del día de su publicación, lo cual resulta ser un límite razonable para alcanzar una capacitación adecuada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Luna Ramos se reiteró en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas pero, vencida en el fondo, se manifestó con el sentido del proyecto, apartándose de las consideraciones.

La señora Ministra Piña Hernández se apartó de las consideraciones, puesto que el proyecto hace referencia a la impugnación del artículo transitorio cuarto de la ley en estudio; no obstante, de la lectura de la demanda no se advierte que dicho artículo se hubiera combatido, sino la deficiente regulación del capítulo VIII del ordenamiento, bajo el argumento de violación al principio de legalidad, esto es, por la omisión de prever una capacitación previa. Además, estimó que no sería viable una suplencia de la deficiencia de la queja, puesto que no resultaría benéfica para la accionante. Por tanto, se expresó en contra del reconocimiento de validez de dicho artículo transitorio.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo al estudio, en su tema 7, denominado "Ausencia de salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de seguridad pública", consistente en declarar infundada la omisión legislativa en cuanto a las salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de las instituciones de seguridad pública, atribuida a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos vencida por la mayoría al votar en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas y en contra de consideraciones, Medina Mora I. por razones diferentes, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández votaron en contra.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando séptimo, relativo a los efectos. El proyecto propone, por una parte, que los efectos surtan cuando se notifiquen los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado.

Modificó el proyecto para proponer, por otra parte, declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 27 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena sugirió agregar la declaración de invalidez, por extensión, del artículo 9, fracción XI.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que votó en contra de la invalidez de los artículos 24, 25 y 26, por lo que estaría en contra de la del 27.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto para agregar la invalidez, por extensión del artículo 9, fracción XI, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Piña Hernández consultó si el artículo 40 se invalidó totalmente o en una porción normativa.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó a favor de la invalidez del artículo 27, y en contra de la del 9, fracción XI, puesto que no implica legislar sobre las modalidades, condiciones o sanciones acerca de la tortura.

El señor Ministro Laynez Potisek coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz, en cuanto a la invalidez del artículo 27, mas no la del 9, fracción XI, pues no significa que se haya legislado en materia de tortura, tan solo se mencionó esa palabra.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán se inclinó en favor de la invalidez, por extensión, del artículo 27, no así por lo que hace al artículo 9, fracción XI. En cuanto a la duda de la señora Ministra Piña Hernández, recordó que se declaró la invalidez del artículo 40, en la porción normativa “sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

La señora Ministra Piña Hernández optó por la invalidez total del artículo 40 pues, de quitarse la última parte, la primera parte mantendría la misma razón de inconstitucionalidad, es decir, prever como primera instancia el uso de la fuerza.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pérez Dayán recapituló que eso se sometió a discusión y votación, siendo el resultado de ella invalidar sólo la porción normativa referida.

La señora Ministra Piña Hernández sostuvo su voto por la invalidez total del artículo 40.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció su voto a favor de la invalidez, por extensión, del artículo 27, y en contra del resto del considerando, para evitar incurrir en alguna contradicción. Asimismo, estimó que no debería invalidarse el precepto propuesto por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por las razones que se han externado.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, relativo a los efectos, respecto de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de determinar que los efectos surtan cuando se notifiquen los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado.

Se expresaron cuatro votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Medina Mora I. con precisiones y Presidente Aguilar Morales, respecto de declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 9,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

fracción XI, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Los señores Ministros Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz anunciaron sendos votos concurrentes.

Se expresó una mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I. con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 27 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Las señoras Ministras Luna Ramos y Piña Hernández votaron en contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz anunciaron sendos votos concurrentes.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó no incluir en el engrose la propuesta de invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 9, fracción XI, y 27 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, al no alcanzar una mayoría calificada.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reiteró haber votado en contra para no incurrir en contradicción respecto de lo que expresó en otros apartados del proyecto. Adelantó que está de acuerdo con los puntos resolutivos que reflejen lo votado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016 promovidas, respectivamente, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, respecto de los actos impugnados en ésta. TERCERO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de la impugnación de los artículos 3, fracciones II, V y XII, 12, fracción II, inciso b), 14, 15, 19, fracción VII, 33, fracción II, y 34, fracciones II y IV, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción III, 16 y 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. QUINTO. Son infundadas las omisiones legislativas consistentes en la ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza y de salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de las instituciones de seguridad pública, atribuidas a la Ley que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 12, fracción III, incisos a) y b), 24, 25, 26 y 40, en la porción normativa 'sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables', todos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. SÉPTIMO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Libre y Soberano de México. OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México', así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta."

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



Sesión Pública Núm. 24


Lunes 27 de marzo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con catorce minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a una sesión privada, una vez que se desaloje la sala, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes veintiocho de marzo del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN